

## El rollo tráfico está matando la reserva natural San Rafael

**Un equipo de ÚH y CIM constató que sigue impune la tala indiscriminada de árboles en la reserva natural. Los camiones rolleros circulan con la protección policial, según la denuncia de los pobladores.**



[ver más imágenes](#)

**VERSION IMPRESA. PDF**

\*\*\*

Por Milder Melgarejo Valiente | CAAZAPÁ. ENVIADO ESPECIAL

El rollo tráfico y la inacción de las autoridades está matando el parque nacional San Rafael. La tala indiscriminada de árboles se vuelve normal para los pobladores y habitantes de la zona adyacente a la reserva natural de 73 mil hectáreas, ubicada entre Caazapá e Itapúa.

Un equipo de investigación de Última Hora y Centro Informativo Multimedios (CIM) ingresó, el pasado jueves, a la reserva y constató que la tala de árboles es de vieja data y continúa impune.

**DEVASTACIÓN.** La depredación de árboles como lapacho, cedro, laurel, incienso, guatambú y guajayvi, y de cualquier otra especie, es criminal en la reserva natural. Los taladores están devorando el parque natural, según verificaron ÚH y CIM.

De acuerdo a las informaciones, los compradores de madera provienen de Caaguazú, Asunción y Alto Paraná. Los compradores pasan por San Juan Nepomuceno, San Carlos, Enramada, Toro

Blanco, Valle í, San Gabriel hasta llegar finalmente a Rivas Cué, donde las maderas aserradas y los rollos son comercializados.

El equipo de periodistas ingresó por un camino alternativo hasta la zona de tala de árboles dentro de San Rafael, a fin de no levantar la sospecha de los traficantes. Un indígena guió a los trabajadores de prensa, por la selva, unos 20 kilómetros, para llegar finalmente hasta la zona de deforestación.

LLAMATIVA PRESENCIA. Árboles recién talados, huellas de tractores, ruidos de motosierras y picadas -para sacar los rollos- en medio de la reserva dan muestra que la depredación va viento en pompa.

Repentinamente, aparecieron dos agentes policiales en medio de la selva. Los uniformados explicaron que hacían un procedimiento en la zona y estaban más que interesados por la presencia de los periodistas.

El jefe de la Comisaría de Tava í, Francisco Aquino, apareció también e informó que su presencia obedece a que recibieron denuncias de la tala y estaban buscando a los traficantes.

Los policías, en todo momento, trataron de minimizar la depredación y tras la insistencia de los periodistas, se pusieron a buscar a los rolleros y el tractor que sacaba las maderas.

Las huellas de las ruedas de la maquinaria y la savia fresca de árboles recién cortados eran la evidencia de que los rolleros estuvieron trabajando todo el día en la reserva. En medio del bosque, aparecían rastros de motosierristas, quienes talaron gran cantidad de árboles.

Tras caminar unos 2.500 metros por la reserva y luego de superar varias planchadas, hasta donde se sacan las maderas para su posterior venta, los policiales encontraron el tractor abandonado en medio de la espesura del bosque. Los rolleros se llevaron la batería de la pesada maquinaria.

DENUNCIA. Según información proveída por los pobladores, cuyos nombres se resguarda por seguridad, los agentes de Tava í estaban custodiando a los traficantes de madera. Aseguran que generalmente escoltan los camiones rolleros hasta la ciudad de San Juan Nepomuceno.

Los denunciantes detallaron que funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Seam), del Instituto Forestal Nacional (Infona) y efectivos policiales de la Agrupación Ecológica y Rural (APER) comercializan las guías de madera a fin de dar un ropaje legal al rollo tráfico.

Los agentes volvieron a ingresar, el pasado viernes, al parque y ya no encontraron el tractor.

Camiones similares a este, cargados con maderas, circulan casi todos los días por los caminos vecinales que conectan con la reserva natural.

TALA INDISCRIMINADA DE PARQUE NACIONAL | Domingo, 14 de Junio de 2009

## Indígena denuncia inacción fiscal

Tres personas que estaban talando árboles en la reserva natural de San Rafael fueron

aprehendidos por un grupo de 20 indígenas, quienes trasladaron a los motosierristas hasta la comisaría de Tava'i. La acción se comunicó al ministerio Público, Unidad en Villarrica.

El asistente fiscal Ariel Amarilla congeló la denuncia y no imputó a los aprehendidos, quienes recuperaron inmediatamente su libertad.

Fue la denuncia que formuló a ÚH y CIM el presidente de la Asociación de Indígenas Mby'a de Caazapá, Reginaldo Orvina, quien especificó que dicha situación se vivió meses atrás.

Indicó que los nativos habían conformado una comitiva de 20 a 30 hombres para actuar como guardia privado de la reserva natural ya que no tienen respaldo o ayuda de los efectivos policiales. Es más, Orvina sostiene que los agentes están involucrados en el negociado porque, según dijo, el rollotráfico deja muy buenas ganancias.

El grupo de guardias se desmanteló porque la Asociación de Mby'a ya no pudo alimentar a los integrantes de la comitiva de guardabosques.

El referente de los nativos aclaró que existen tres comunidades indígenas dentro del predio del área de reserva de San Rafael, de los cuales, dos ya cuentan con el título de propiedad que los acredita como dueños legítimos de dichas tierras.

Precisó que el rollotráfico afecta considerablemente a los indígenas ya que están perdiendo el bosque natural que les provee de alimentos porque los motosierristas ingresan a la reserva y están destruyendo todo. Los traficantes de madera están talando cualquier tipo de árbol, sentenció.

TALA INDISCRIMINADA DE PARQUE NACIONAL | Domingo, 14 de Junio de 2009

## Policías e indígenas se acusan de apañar el delito ambiental

Por Milder Melgarejo Valiente

CAAZAPÁ. ENVIADO ESPECIAL

La ausencia del Estado y la inacción de autoridades departamentales y locales permiten que el rollotráfico goce de buena salud en la zona adyacente a la reserva natural San Rafael. Los pobladores de algunos distritos de Caazapá, campesinos sintierras, policías e indígenas se acusan mutuamente por el delito ambiental.

Cada sector dio su versión al equipo de Última Hora y Centro Informativo Multimedia (CIM), cuyos periodistas estuvieron recogiendo versiones de los pobladores de los distritos de San Carlos, Enramada y Tava í, así como de las comunidades nativas de Karanda, Ka'aguy Pa'u y Tuna í.

Las autoridades policiales acusan a los estancieros e indígenas de estar involucrados en la comercialización de maderas sacadas de la reserva forestal. A su turno, los nativos y algunos dirigentes campesinos de la zona sostienen que tanto policías como fiscales hacen caso omiso a las denuncias de rollotráfico. Todos se lavan la mano a la hora de hablar sobre la deforestación

de San Rafael.

VERSIÓN POLICIAL. El jefe de la Comisaría de Tava í, suboficial Francisco Aquino, acusó directamente a los indígenas de la parcialidad Mbya de vender los rollos y brindar información exacta a los motosierristas sobre la ubicación de los mejores árboles para la tala correspondiente.

El agente igualmente sostuvo que supuestos campesinos sintierras y trabajadores de estancias están involucrados en la venta de rollos.

Recordó que meses atrás durante una intervención fiscal y de la Seam se comprobó que en el área de reserva de San Rafael, específicamente dentro de la estancia Santa Inés, distrito de San Juan Nepomuceno, de Antonio Ibarra Llano, los campesinos que ocupan dicha zona se dedican a la tala de madera dentro de la propiedad.

MEDIADORES. Algunos pobladores de la zona de área de reserva del parque igualmente estarían involucrados en el rollo tráfico.

Las autoridades le tienen en la mira a la familia Martínez, de Rivas Cué, y Araújo, de Tava í, quienes supuestamente estarían comercializando las maderas aserradas en el predio de la reserva.

De acuerdo a los datos, dichas familias se encargan de proveer tractores y dar trabajo a los motosierristas para talar los árboles de San Rafael.

De hecho, en la Comisaría de Tava í existe una notificación fiscal para un tal Loí Martínez, quien fue citado para declarar sobre un delito ambiental que supuestamente cometió en el predio de la reserva.

DENUNCIA NATIVA. El cacique de la comunidad indígena Tuna í, Basilio Aquino, acusó a los fiscales y efectivos policiales de encubrir el tráfico de rollo. Preciso que se cansaron de acercar denuncias del delito ambiental ante el Ministerio Público y Comisaría Policial de Tava í.

Indicó que le llama la atención que las autoridades hagan oídos sordos a la denuncia de los nativos.

Rodeado de unas 14 familias indígenas, el jefe de la comunidad informó que aproximadamente dos o tres días por semana escuchan ruido de tractores y motosierras en medio de la reserva natural San Rafael.

MODUS OPERANDI. Para llegar hasta la zona de Rivas Cué o Tava í, zona de área protegida del parque, donde se comercializan los rollos, existen tres puestos policiales, específicamente en San Juan Nepomuceno, San Carlos y Tava í.

Los camiones rolleros, previo pago de coima, que van desde 200 hasta 500 mil guaraníes, acceden hasta la zona de compra de maderas a fin de transportar los mismos hasta los aserraderos de la zona.

Las guías para sacar las maderas estarían siendo proveídas por los propios funcionarios de la Seam o Infona. El equipo de ÚH y CIM no pudo ubicar a dichos empleados estatales en sus puestos de trabajo, a fin de obtener su versión sobre el tema.

A pesar del constante tráfico de camiones pesados por la zona de Caazapá, los caminos vecinales se encuentran en muy buenas condiciones.

Llamativamente, y tras percatarse que se trataba de medios de comunicación, algunos

pobladores de San Carlos y Enramada, además de los efectivos policiales de Ñumi, distrito de San Juan Nepomuceno, mostraron actitudes hostiles hacia trabajadores de ÚH y CIM.

#### FUEGO, OTRA AMENAZA

En los primeros meses del 2006, un feroz incendio consumió gran parte de la reserva forestal de la cordillera de San Rafael. Los bomberos habían detectado unos doce focos de incendio, de distintas magnitudes, que estuvieron distribuidos en una área de aproximadamente 200 hectáreas. Fue el segundo caso en menos de un año.

El siniestro se produjo en la jurisdicción del distrito de Alto Vera, muy cerca al límite con el departamento de Caazapá. Los lugares afectados por el fuego fueron la zona de la compañía Arroyo Claro, en el interior de un asentamiento indígena, propiedad del Indi, y en el interior de un establecimiento agroganadero conocido como Toro Blanco.

Actualmente, dichas zonas están siendo reforestadas con euca-liptos.